6. SUBVENCIONES Y AYUDAS

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Secretaría General

Notificación de resolución de recurso de alzada interpuesto contra la resolución del director general de Vivienda y Arquitectura de 30 de enero de 2006, dictada en el expediente 39-2S-0120/2005.

No habiéndose podido notificar la resolución que a continuación se reproduce, tras haberse intentado, se procede a la publicación del presente anuncio al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

“RESOLUCIÓN

Visto el expediente tramitado y el escrito de interposición del recurso de alzada, se establecen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de registro de entrada de 13 de junio de 2005, DON SERGIO MARTÍNEZ ARANGO formula solicitud de ayudas en materia de alquiler de vivienda sita en calle Tres de Noviembre 2 B 2º derecha de Santander.

SEGUNDO.- Con fecha de 30 de enero de 2006, el director general de Vivienda y Arquitectura dicta resolución por la que deniega la solicitud de financiación, con base en el artículo 21 del Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, por exceder la renta por metro cuadrado de superficie útil el máximo para una vivienda sita en Santander.

Dicha resolución es notificada al solicitante por el Servicio de Correos con fecha de 13 de febrero de 2006.

TERCERO.- Con fecha de registro de entrada de 27 de febrero de 2006, DON SERGIO MARTÍNEZ ARANGO interpone recurso de alzada frente a la resolución del director general de Vivienda y Arquitectura de 30 de enero de 2006, en el cual alega fundamentalmente discrepancia con los criterios recogidos en el artículo 21 del Decreto 37/2005, y expone circunstancias personales y familiares por las que solicita una adaptación de dichos criterios legales a su caso concreto, a fin de que le sea otorgada la subvención solicitada “o en su caso propongan una alternativa para acceder a ella”.

CUARTO.- Con fecha de 20 de marzo de 2006 se emite por parte de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura informe en relación con el recurso de alzada interpuesto, en el que se expresa lo siguiente:

“[...] esta Dirección General, resolvió, en fecha de 30 de enero de 2006, la denegación de las ayudas al alquiler solicitadas, por don Sergio Martínez Arango, por exceder el precio de alquiler por m² de superficie útil de la vivienda del máximo permitido por el artículo 21 del Decreto de Gobierno de Cantabria 37/2005, de 7 de abril. A esta conclusión se llega, tras comparar el precio de alquiler mensual de la vivienda (370,00 euros) por m² de superficie útil (37,00 m²) de la misma, que resulta ser de 10,00 euros, con el máximo permitido por el citado artículo 21, que fijan dicha cuantía en 6,96 euros/m² para el municipio singular de Santander, en el que se ubica la vivienda.

El recurrente, más que alegar razones objetivas que rebatan la resolución recurrida, esgrime una serie de razones subjetivas: insuficiencia de la superficie útil de la vivienda de oferta de vivienda por parte del Gobierno de Cantabria para los jóvenes etc, razones todas que pueden considerarse como una velada crítica a las condiciones

impuestas por la normativa del Plan de Vivienda 2002-2005, por lo que al precio se refiere, que a todas luces es inferior al que rige en el mercado.

El Decreto 37/2005, de 7 de abril, del Gobierno de Cantabria, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, complementa y desarrolla el contenido normativo de base establecido por el Real Decreto 1.721/2004 (sic), de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.

El artículo 21 del Decreto 37/2005, establece que la renta anual prevista en el contrato de arrendamiento no podrá ser inferior al dos por ciento ni superior al nueve por ciento del precio básico nacional por 1,25, siempre en relación a los metros cuadrados de superficie útil de la vivienda. Todo ello sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicación de la vivienda en un municipio singular, tal como dispone el artículo 20.2 del Real Decreto 1/2002, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1.721/2004.

La disposición adicional segunda del Real Decreto 1721/2004, fija el precio básico a nivel nacional en la cantidad de 674,94 euros por m² de superficie útil. Partiendo de esta cantidad, multiplicándola por el coeficiente 1,25 y hallando el 9 por ciento del producto, se obtiene la cantidad de 75,93 euros/año a los que hay que incrementar un diez por ciento adicional por estar la vivienda situada en el municipio de Santander, con lo que resulta la cantidad final de 83,52 euros/año, que equivale a 6,96 euros/mes por m² de superficie útil de vivienda.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General entiende que debe desestimarse el recurso y mantenerse la resolución recurrida por ser ajustada a derecho.”

QUINTO.- Con fecha 15 de febrero de 2007 la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda emite informe favorable a la desestimación del recurso de alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de alzada reúne los requisitos exigidos al efecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativos a personalidad, legitimación en causa, forma, plazo y órgano departamental competente para su admisión a trámite.

SEGUNDO.- La competencia para resolver el recurso corresponde al consejero de Obras Públicas y Vivienda, a tenor de lo establecido en el artículo 33.h) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con el artículo 128.3.b) del citado texto legal.

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, cabe señalar que una vez comprobada la documentación aportada junto con la solicitud de subvención en materia de arrendamiento de vivienda, el informe de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de fecha 20 de marzo de 2006 señala que la ratio entra la renta mensual y el metro cuadrado de superficie útil de la vivienda arrendada es superior al máximo permitido por el artículo 21 del Decreto 37/2005, de 7 de abril para el municipio en el que se sitúa dicha vivienda. Este es un hecho no controvertido, pues el recurrente no desmiente el hecho de que su solicitud no cumple la normativa exigida, por sobrepasar la renta máxima por metro cuadrado reglamentariamente establecida.

CUARTO.- Los motivos del recurso se basan sustancialmente en que el precio establecido por la normativa del Plan de Vivienda sería incompatible con el precio real de

mercado de la zona en que se sitúa la vivienda adquirida, lo que, a juicio de la recurrente, haría inviables las ayudas. Ante tales hechos, debe señalarse que no se discute el pleno ajuste a Derecho de la mencionada resolución, por lo que dicha petición reviste el carácter de graciable, resultando que tampoco puede reconducirse la misma al derecho de petición contemplado por el artículo 29 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y la Ley Orgánica 4/2001, de 16 de noviembre, pues a tenor del artículo 8 de esta última norma:

“No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.”

Por todo ello, existiendo un procedimiento administrativo al efecto de solicitar ayudas para el arrendamiento de viviendas en el marco del Plan de Vivienda 2002-2005, es a este procedimiento al que ha de reconducirse la solicitud de la recurrente. Sin embargo, en el ámbito del mismo no resultan admisibles peticiones graciabiles como la que se recoge en el recurso de referencia. En efecto, una vez afirmada la existencia de un exceso sobre la renta máxima legal por metro cuadrado, resulta irrelevante la cuantía a la que ascienda dicho exceso, pues cualquier importe, por mínimo que sea que sobrepase el máximo permitido debe determinar una resolución denegatoria de las ayudas solicitadas. Por el contrario, la permisión de cualquier rebasamiento de los parámetros fijados legalmente atentaría contra los principios de igualdad, seguridad jurídica y sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho, consagrados por los artículos 9, 14 y 103 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre Medidas de Financiación de Actuaciones Protegidas del Plan 2002-2005; el Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria; y las demás disposiciones atinentes y de general aplicación,

RESUELVO

Desestimar en su totalidad el recurso interpuesto contra la resolución referenciada, confirmando ésta en todos sus términos, por resultar ajustada a Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación.

Santander, 2 de mayo de 2007.—El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese a: INTERESADO, DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA Y SECRETARÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.”

Santander, 17 de mayo de 2007.—El secretario general, Víctor Díez Tomé.
07/7826

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Orden GAN/31/2007, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras que han de regir la concesión de ayudas para estimular la creación de servicios de sustitución, por entidades asociativas en las explotaciones agrarias de Cantabria, y se convocan para el año 2007.

El Reglamento (CE) número 1.698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece dentro de las ayudas en materia de desarrollo rural que buscan el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, las destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano a través de la implantación de, entre otros, servicios de sustitución en las explotaciones agrícolas.

El Reglamento (CE) número 1.974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, establece las disposiciones de aplicación del citado Reglamento (CE) número 1.698/2005.

Considerando la necesidad de avanzar en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y ganaderos, así como de los empleados de las explotaciones agrarias que componen el núcleo fundamental de la actividad agraria en Cantabria, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en virtud de las atribuciones reconocidas en el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras que han de regir la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación de servicios de sustitución por entidades asociativas en el marco de la actividad agraria, y convocar éstas para el año 2007.

El Servicio consistirá en la sustitución temporal de los titulares de las explotaciones agrarias asociadas, de sus cónyuges o de sus colaboradores mayores de edad, en el trabajo propio de la explotación, en los casos de enfermedad, accidente, actividades de formación, necesidades familiares o disfrute de tiempo libre.

Artículo 2.- Financiación.

1. Las ayudas reguladas por esta Orden, serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del eje 1 de las ayudas en materia de desarrollo rural.

2. La participación financiera de la Comunidad Autónoma se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 05.04.414A.771 (ayudas a la modernización de explotaciones) de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2007 y los que correspondan, de acuerdo con la naturaleza plurianual del gasto, en los ejercicios 2008 a 2012. Los importes máximos previstos son: 64.200 euros para el año 2007, 128.400 euros para el año 2008, 66.300 euros para el ejercicio 2009, 46.200 euros para el 2010, 27.600 euros para el 2011 y 6.300 euros para el año 2012.

Artículo 3. Compatibilidad

Las ayudas previstas en la presente Orden, serán incompatibles con las que, para los mismos fines, tenga establecidas o establezca la Comunidad Autónoma de Cantabria.